



Piedras y palabras

TOMÁS VAL
ESCRITOR



«¿Cuál es el futuro de nuestros centros educativos en ese libre mercado donde los títulos se compran como deportivos de lujo o simples utilitarios?»

Andan nuestros rectores convertidos en contables, que no hacen otra cosa que tratar de cuadrar los balances y pensar si esos desvelos les serán recompensados con algún puestecito (nada exagerado, un buen pasar) fuera del ámbito académico. Es más que curioso, en una profesión que se supone vocacional, ese anhelo de abandonarla. Andan, digo, reuniéndose con los responsables políticos para tratar de cuadrar el círculo, de conseguir que la implantación de la reforma Wert sobre la duración de los grados universitarios no les cueste más dinero a los estudiantes. Los rectores castellanos y leoneses se reunieron hace unos días con el consejero de Educación, Juan José Mateos, y el director general de Universidades, Ángel de los Ríos, para tal fin. ¿Que qué acordaron? Nada, porque nada pueden acordar más allá de aquello de la canción de Serrat de «propiciar un diálogo de franca distensión que les permita hallar un marco previo que garantice unas premisas mínimas bla bla bla».

Ya saben ustedes que ahora las carreras –sigamos usando los términos con los que crecimos– se dividirán en dos etapas: el grado, que durará tres o cuatro años, y que se financiará mayoritariamente con fondos públicos, y el master, de uno o dos años, que tendrá que pagarse el alumno. ¿Cuánto cuesta el master? Un potosí.

Los peor pensados aducen que la medida –emana de Bolonia– de la fortuna, a los que no puedan disponer de los cinco o diez mil euros que bien puede costar el dichoso master, dependiendo de que sea de uno

o dos años. No es cierto. Lo que buscan es que la Administración se ahorre dinero. Eso es lo que los políticos quieren: cada euro público que se gastan es como si se lo quitaran del bolsillo (vaya, hay metáforas que las carga el diablo). En resumidas cuentas, que los estudiantes tendrán que pagarse el master a cojón de oro. No en vano, la unidad del tiempo de formación universitaria se llama crédito.

Cuando el estudiante acabe los 180 créditos de grado –los tres primeros cursos, la educación pública, para entendernos– ha de cursar otros 120 de pago. ¿En la misma universidad? No necesariamente. Una vez apartado de la Seguridad Social, el paciente podrá elegir su médico privado. Y ahí radica la sentencia de muerte para varias universidades de Castilla y León, públicas o privadas. El estudiante podrá acudir a otros centros de mayor prestigio, ya sean más caros o más baratos. Exageremos: ¿se valora igual en el mercado de trabajo un título expedido por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, por la universidad de Harvard o de Stanford que los provinientes de León, de Valladolid, de Salamanca o de Burgos?

¿Cuál es el futuro de nuestros centros educativos en esa competencia, en ese libre mercado donde los títulos se compran como coches deportivos de lujo o simples utilitarios?

Imagino que la única posibilidad de supervivencia para las universidades es la especialización, tratar de convertirse en centros de referencia de determinadas materias.

¿Qué podemos vender en Castilla y León? Piedras y palabras. Pasado y memoria. ¿Sabrán– o querrán– venderlo nuestros rectores y nuestros políticos?